

¿Cuándo se jodió la

El Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial en el punto más bajo de su credibilidad. Los partidos sin renovación y experimentando todos los vicios del pasado. Fujimori primero en las encuestas. Amenazas de salirse de la CIDH. Ataques virulentos a la Comisión de la Verdad. Otra vez se manipula con éxito y de la peor manera el miedo al terrorismo. Procuradores anticorrupción jugando los descuentos. Tuesta defenestrado de la ONPE que reconstruyó y prestigió. Mufarech sigue en el Congreso. Las reformas institucionales detenidas o en retroceso. Para refraseando la ya clásica pregunta de Vargas Llosa en Conversación en La Catedral, le preguntamos a un selecto grupo de analistas: ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Adónde vamos? ¿Hay algo que hacer?

Fueron tres hitos, Zavalita

rosa maría
palacios

Periodista.
Programa *Prensa Libre*

La transición se jodió el 3 de junio del 2001, después de las 9 de la noche. La fecha y la hora son tan arbitrarias como cualquier otra, pero esa fue la primera de las muchas en que este régimen caminó hacia su destrucción y, por eso, por ser punto de inicio de un proceso, vale la pena consignarla.

Ese día, segunda vuelta electoral, Alejandro Toledo era el ganador y Alan García, el contrincante perdedor, se presentó en el Hotel Sheraton a saludar a su adversario político. El gesto, más que un mero evento democrático, tenía su segunda intención. Para cualquier observador era claro que Toledo no tenía ninguna posibilidad de formar un gobierno viable suman-

do las fuerzas de Perú Posible y el FIM. Ninguno de los dos es, en realidad, un partido político, sino más bien la expresión de un conglomerado de intereses disímiles, casi tantos como individuos los dirigen. Asimismo, si bien la sumatoria de sus votos en el Congreso la convertía en la fuerza mayoritaria, juntos no sumaban los 61 votos que les daría la mayoría calificada.

En esas circunstancias, García, al fin y al cabo un aterrizado en la política nacional luego de casi diez años de ausencia, jugó sus fichas de la forma más astuta posible. Si bien el ofrecimiento fue hecho en términos generales, Alan llegó a ofrecer un gobierno de concertación, es decir, desde la posibilidad de explorar una



alianza con Perú Posible hasta, al menos, garantizar que el APRA no sería oposición al gobierno.

¿Qué respondió Toledo? "Mi mujer no te perdona por la campaña." La respuesta, para un político trajinado como García, no podía ser más desconcertante.

transición, Zavalita?



"Anda arréglate con tu mujer; ¿yo qué tengo que ver?", respondió García, palabras más, palabras menos. Pero la suerte estaba echada. Toledo demostró ser un hombre en lo personal, lleno de resentimientos y sentimientos de venganza casi irracionales en un político, en ese momento, vencedor. García le extendía un puente y él le prendía fuego, sin siquiera escuchar a dónde podía haberlo llevado.

Durante los años siguientes, muchos de los mejores y bien intencionados ministros y asesores de este régimen han tratado de persuadir a Toledo de iniciar un gobierno de concertación. Frente a cada intento, Fernando Olivera ha insistido, con éxito, en que el único camino es el de la confrontación en sus términos más tradicionales de oposición-gobierno, agitando el fantasma de una vacancia en el Congreso que resultó el mecanismo eficien-

te para exacerbar el pánico presidencial.

El triunfo de Olivera, el verdadero ganador de las elecciones del 2001, fue el fracaso de la transición. Todo lo que se ha hecho en estos años por lograr un gobierno de "todas las sangres" ha estado plagado de retórica hueca. El Acuerdo Nacional no tiene credibilidad salvo en sus entusiastas patrocinadores, cuyos esfuerzos no desmerezco, pero que no han comprometido la voluntad de quien debió ser su principal mentor; es decir, el Gobierno. Esta esquizofrénica relación (¿Concertamos? ¿Confrontamos? ¿Qué nos toca esta semana? ¿Está Olivera en Lima?) con la oposición no ha conseguido sino el enajenamiento de la sociedad con toda la clase política y, más profundamente, con el Gobierno.

El segundo hito del fracaso de la transición está en Arequipa, junio

del 2002. Particularmente el 19 de junio, día de la capitulación del Gobierno, que debería consignarse para la posteridad como el "Día de la Oclocracia". Ese día, la oclocracia —el gobierno de la turba— ganó su violenta batalla callejera cuando el Gobierno aceptó su poder y renunció a la autoridad con la que está investido por el voto de millones de peruanos. Bienvenidos a la República Peruana, donde cada quien hace lo que le da la gana.

De ahí en adelante, no solo se paralizó un programa de inversión privada en infraestructura pública que resulta indispensable para el desarrollo social sino que, además de perder millones de dólares en oportunidades irre recuperables, el Gobierno se ha presentado ante el país como una instancia débil e inconsistente. Frente a eso, cualquier reclamo se organiza bajo formas violentas en las que los responsables de

daños públicos y privados cada vez más serios se pierden en el anonimato de la masa. El Estado es incapaz de identificar a sus agresores y no ha podido, hasta hoy, establecer el hilo conductor entre decenas de protestas que saltan, aparentemente de modo inorgánico, por todo el país.

En los últimos meses, un fenómeno cada vez más generalizado incluye el tomar la justicia con las manos y ejecutar a quien la turba juzga delincuente. El Estado ausente en todo su esplendor, llegando tarde frente al delito, como tarde llega Toledo a todas sus citas.

El tercer hito del fracaso de la transición se dio el 15 de diciembre del 2003, con la salida de Beatriz Merino de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con

su renuncia se perdió, tal vez, la última oportunidad de iniciar alguna reforma institucional que valga la pena recordar de este Gobierno. Meses después de su partida, salvo la reforma del régimen de pensiones, ese sí un triunfo extraordinario que agradecerán los próximos gobiernos, no queda nada de la reforma policial, la reforma de Defensa, la reforma del Estado, la reforma de Justicia o la de la Educación. Este Gobierno, al estilo del segundo belandismo, se ha dedicado a administrar el *statu quo*, sin más propuesta que esa, en un país que lo que necesita es, más que reformas, una revolución.

No deja de ser sugerente que utilicemos una de las frases de *Conversación en La Catedral*, obra de Mario Vargas Llosa, para hablar del fracaso de este

Gobierno. Tal vez esto nos obligue a hablar del compromiso de los intelectuales con Toledo. Un compromiso demasiado generoso con quien se negó a rectificar errores desde el primer día. Excusarlo porque es indio y este es un país racista es tan condescendiente que no merece comentario. En Toledo el delirio por la pompa y la falta de austeridad personal no resultaron ser aspectos accesorios. La sensación de botín, los parientes, los amigos, las venganzas estúpidas y los congresistas estilo Mufarech han llenado esta transición. Tanto que odio la frase, porque la asocio con minoría de edad, con irresponsabilidad, con ingenuidad, de un lado, y con todo vale, del otro. Espero que desaparezca del vocabulario político para siempre. ■

El círculo estaba cuadrado

fernando
rospigliosi

Analista. Ex ministro del Interior

La transición, entendida como el tránsito de la dictadura a la democracia y como un proceso de reconstrucción institucional, se truncó muy pronto; el 2002, si se le quiere poner una fecha.

El daño fundamental que causó al país el corrupto Gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos fue la destrucción de las instituciones, que antes de 1990 no eran eficientes ni honestas, pero después del 2000 quedaban en ruinas.

Resolver el problema implicaba

solucionar la cuadratura del círculo: cómo renovar las instituciones sin instituciones que impulsaran el cambio.

Como ocurre en sociedades desarticuladas como la peruana, las cosas quedaban —básicamente— en manos del líder. Una conducción adecuada podía producir cambios sustanciales; una incorrecta, llevarnos al desastre. Sucedió lo segundo.

No fue así desde el comienzo. Algunas cosas que se hicieron demostraron que era posible



realizar cambios positivos. La lucha anticorrupción, que se inició con la Procuraduría que

organizó José Ugaz, tuvo un impulso decisivo durante el Gobierno de Valentín Paniagua y continuó durante los primeros meses del actual. No fue poco lo que se hizo: se constituyó un sistema anticorrupción (tribunales, fiscales, procuraduría) muy superior al promedio; se dictaron leyes importantes como la de colaboración eficaz; se recuperaron decenas de millones de dólares robados; se envió a la cárcel y se procesó a muchos personajes importantes, como nunca antes en la historia del país.

Este es un ejemplo de cómo, a pesar de las enormes carencias institucionales y de todo tipo, un liderazgo apropiado podía producir cambios y obtener resultados. Ha sido un trabajo cuesta arriba, naturalmente, venciendo enormes resistencias e intereses muy poderosos.

Ahora está siendo seriamente minado. Sus primeros adversarios están dentro del Gobierno, pero también en los principales partidos políticos. Todos tienen su Mantilla, su Bedoya, su Gamarra, su Almeyda.

Esta es una de las claves del fracaso de la transición. Los partidos políticos no son capaces de propulsar una lucha decidida contra la corrupción porque tienen rabo de paja. Por eso no quieren reformar el Poder Judicial y el Ministerio Público, a pesar de que es una necesidad nacional perentoria. Ellos prefieren instituciones débiles y corruptas, susceptibles a las presiones, el chantaje y el soborno, a instituciones independientes, eficientes y honestas. Aunque el país se hunda.

Lo ocurrido en el Ministerio del Interior es una evidencia de lo mismo. Se demostró que un equipo podía emprender cambios fundamentales en una institución que había sufrido el manoseo de Montesinos y su gavilla de delincuentes. Pero también se manifestó que esas transformaciones podían ser rápidamente deshechas. El motivo: ese sector es importante de controlar cuando se quiere hacer un mal uso del poder.

Estaban las ideas y la gente. Falló el Presidente. Débil, sin convicciones, cada vez más enredado en asuntos turbios, lo estropeó todo. No había ninguna presión irresistible que lo obligara a ello. Lo hizo simplemente por incompetencia, por falta de creencias firmes, por el uso desenfrenado del poder, que lo llevó a enmarañarse cada vez más en actividades cuestionables.

En el Ministerio de Defensa, la reforma apenas empezó con Aurelio Loret de Mola y pronto se truncó. La idea básica era crear un auténtico ministerio, que no fuera un apéndice de los institutos.

En este caso, y en el del Consejo Nacional de Inteligencia, se trataba de establecer un auténtico control civil, como debe existir en una democracia, como ocurre en todos los países desarrollados y varios latinoamericanos. Las condiciones, luego del derrumbe

de la dictadura, con los cabecillas de la mafia presos, con la evidencia de las fechorías perpetradas registradas en vídeos y abultadas cuentas extranjeras, eran inmejorables. Sin embargo, el retroceso hoy día es obvio. El CNI está destruido, desacreditado y es completamente inútil. La reforma militar no existe más; la cúpula es cada vez más autónoma del poder civil e impone crecientemente sus condiciones, estableciendo nuevamente la perversa y destructiva relación que ha existido desde siempre con los civiles.

En estos casos se podía avanzar en un proceso de reforma del Estado, de transformación de las instituciones. Estaban las ideas y la gente. Falló el Presidente. Débil, sin convicciones, cada vez más enredado en asuntos turbios, lo estropeó todo. No había ninguna presión irresistible que lo obligara a ello. Lo hizo simplemente por incompetencia, por falta de creencias firmes, por el uso desenfrenado del poder, que lo llevó a enmarañarse cada vez más en actividades cuestionables. De ahí a rodearse y ubicar en los puestos de poder a personajes tan escabrosos como César Almeyda, Jorge Mufarech, Daniel Mora y muchos otros, había solo un paso que dio rápidamente.

No se trata de un problema ideológico, como absurdamente quieren hacer creer algunos. Cambiar a Roberto Dañino por Luis Solari, a Nicolás Lynch por Gerardo Ayzanoa, a Fernando Villarán por Jesús Alvarado, no tiene nada que ver con la ideología y sí con un manejo patrimonialista del poder.

Si se quiere establecer una dimensión temporal a un proceso de continuo deterioro, con sus altibajos, es el semestre que va desde julio del 2002 a enero del 2003. Del desafortunado cambio de gabinete de mediados del 2002, hasta la salida de Gino Costa del Ministerio del Interior en enero del 2003 y el inicio del irreversible derrumbe de la popularidad presidencial. En ese periodo el Presidente termina de enredarse en sus tejemanejes y se ve urgido a

poner a "su gente" en puestos claves.

Esto no hubiera ocurrido si existieran instituciones consistentes y partidos consolidados. A falta de eso, un liderazgo firme, honesto y con rumbo podría haber producido un cambio. El Presidente no dio la talla y la transición se frustró.

En la campaña electoral se advirtieron las enormes deficiencias del candidato y el pasivo que arrastraba. El Comité de Campa-

ña pudo controlar los daños. El monumental rechazo que suscitaba el rival hizo el resto, como recientemente ha reconocido Carlos Bruce, uno de los miembros de ese Comité y que conoce las cosas por dentro.

Pero, a diferencia de lo que algunos creíamos, en la Presidencia las cosas fueron mucho peor. Es decir, el curso que se pudo mantener en la campaña fue imposible de establecer en el Gobierno. Las consecuencias las padecemos todos los peruanos. ■

¡Basta ya, Zavalita!

francisco
sagasti

Director de Agenda PERÚ

¿Cuándo se jodió la transición democrática? Aparentemente, esa sería la pregunta que se haría un Zavalita contemporáneo, transportado desde las páginas vargaslosianas de *Conversación en La Catedral* al desconcertado tiempo que corre al finalizar el 2004.

Luego del milagro cívico que vivimos durante los cortos meses del Gobierno de Valentín Paniagua, durante el cual se sentaron las bases de lo que podría haber sido una exitosa transición hacia la democracia, el descalabro del Gobierno de Alejandro Toledo nos ha vuelto a sumir en una depresión colectiva.

Lejos está el tiempo en que se logró pasar de la autocracia a la democracia sin derramamiento de sangre (con la excepción de

los vigilantes en el Banco de la Nación); en que decenas de generales, políticos y funcionarios del corrupto régimen fujimorista fueron encarcelados; en que se pudo organizar, casi a la carrera, una impecable elección presidencial que fue muy reñida pero no cuestionada; y en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación inició su tarea de ponernos delante un espejo a todos los peruanos (espejo en el que muchos de nuestros compatriotas se niegan a mirarse).

Quizá la transición democrática empezó a joderse cuando abrigamos expectativas exageradas, animadas en gran medida por las copiosas promesas en la campaña electoral del 2001. O, quizá, cuando, a la semana de ser elegido, Alejandro Toledo dijo que no pensaba que ser Presidente



sería tan fácil (claro, no dijo que *gobernarle* parecía fácil).

Otros posibles momentos para identificar el "punto de joda" serían: cuando congresistas corruptos y prepotentes empezaron a ufanarse de su impunidad y a avergonzarnos con su comportamiento; cuando las demandas populares se desbordaron al constatar que solo mediante protestas callejeras se conse-

guía la atención del Gobierno; cuando la lucha contra la corrupción se estancó y empezó a retroceder, mostrando la persistencia de redes de poder oculto en diversas partes del aparato estatal; o cuando el prófugo Alberto Fujimori empezó a liderar las encuestas de posibles candidatos para las próximas elecciones.

No faltan puntos de inflexión que llamarán poderosamente la atención de nuestros "jodidólogos", empeñados en identificar precisamente el momento en el cual el Perú perdió, otra vez, una oportunidad —en este caso, de consolidar la transición democrática—. Pero el problema no consiste en identificar estos supuestos "puntos de joda", que los hay muchos. El problema está en que seguimos repitiendo mecánicamente la pregunta que se hizo Zavalita sin darnos cuenta de lo que representa: una obsesión atávica por determinar

exactamente qué aspecto, evento o momento del pasado nos ha llevado a la deprimente situación actual.

El Perú es un país lleno de diagnósticos que nos indican hasta la saciedad lo que está mal, y que señalan con precisión quirúrgica nuestros defectos, problemas y carencias.

Esta zavalística obsesión consume nuestras energías y nuestro tiempo. Las pocas veces que miramos hacia el futuro nos dedicamos a elucubrar fantasías y planes utópicos, tenuemente vinculados a la realidad. Todo esto deja escaso espacio para lo que debiera ser nuestra tarea central: diseñar y poner en práctica estrategias y políticas para superar nuestras limitaciones, para hacer buen uso del enorme potencial que tiene nuestro país, y para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen la globalización y la sociedad del conocimiento.

Somos, al iniciarse el siglo XXI, un país sobreestudiado y subgerenciado —aunque quizá sería mejor decir "sobrediagnosticado" y "subplanificado"—. Nada demuestra esto con mayor claridad que el bajo nivel del debate político en la actualidad, en el que las denuncias y los insultos han reemplazado a los argumentos y las propuestas.

Digamos ¡Basta ya, Zavalita...! Dejémonos de lamentar las oportunidades perdidas, de precisar cuándo se jodieron el Perú, la transición democrática, la clasificación al mundial de fútbol, o lo que se quiera. Dedicuémonos a ver cómo salir adelante; fijemos metas realistas; diseñemos estrategias operativas y movilizemos energías y voluntades. Sin exagerar mucho, podríamos decir que el Perú se jodió cuando Zavalita se preguntó ¿cuándo se jodió el Perú? —y que seguirá jodido mientras continuemos haciéndonos esta pregunta—. ■

De Zavalita a Toledito

augusto
álvarez

Periodista. Director de *Perú.21*

"Él era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿en cuál? Frente al Hotel Crillon un perro viene a lamerle los pies: no vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa: no hay solución."

La cita —un pasaje inicial de *Conversación en La Catedral*—

constituye un clásico de la literatura peruana al que se ha recurrido ininidad de veces para interpretar nuestras desventuras políticas. Lamentablemente, vuelve a ser aplicable hoy en día a la accidentada transición política, pero con una diferencia significativa: Santiago Zavala —el personaje de Mario Vargas Llosa— sabía que estaba jodido; Alejandro Toledo, en cambio, el



personaje de nuestros días, no parece darse cuenta de que lo está.

Lo primero que sugiere la pregunta planteada por *ideele* es dilucidar si la transición política "está jodida" o "ya se jodió".

Esta transición debió haber permitido, después de una autocracia gangsteril, fortalecer la democracia y las instituciones, sancionar la corrupción con justicia, promover el progreso económico y, en general, devolverle a los peruanos una sensación de futuro para el país, un futuro en el que prime la decencia. Es decir, que el Perú es posible.

Desde este punto de vista, después de cuarenta meses se puede prever que el Gobierno del presidente Toledo será un fracaso clamoroso, que el resultado alcanzado producirá frustración y que, en el mejor de los casos, estará muy por debajo de lo previsto.

Es decir, no es que la transición "esté jodida", sino que "ya se jodió", pues lo mejor que se puede esperar del Gobierno actual en el tiempo que le resta es que sobreviva pero sin alcanzar los objetivos principales que demandaba el quinquenio 2001-2006.

No todo es malo, y algunos logros se han conseguido. Estos se ubican principalmente en el terreno económico, donde se han concretado algunas inversiones relevantes, se ha hecho una reforma trascendente —el fin de la cédula viva— y se ha mantenido la estabilidad económica, aunque no mucho más.

En el campo político-institucional, en cambio, donde debían darse las transformaciones principales del periodo, el balance es paupérrimo. Las instituciones más desprestigiadas del país son —según las encuestas— los partidos políticos, la Presidencia de la República, el Poder Judicial, el Congreso y el Consejo de Ministros. El ciudadano común y corriente desprecia al presidente Toledo y le ha perdido el respeto.

No se ha concretado ninguna reforma institucional sustantiva. La constitucional está en el tintero, la judicial nunca empezó, la policial se entrampó, la militar ha ido perdiendo fuerza, la del Estado solo es un buen tema de discursos.

Cree, además, que ser parlamentario es parecido a militar en el hampa (y en algunos casos esto tiene asidero en la realidad). El Congreso es, para el asco de la gente, un espacio político de abuso frecuente del puesto público para el beneficio particular. Cuando se identifica algún comportamiento irregular, los colegas hacen todo lo posible para enjuagar el desaguisado. Esto, además, solo lo denuncia la prensa, pues la capacidad de autocontrol entre los congresistas es nula. Hay, sin duda, excepciones valiosas, pero son

pocas y su imagen acaba mezclada con la de los bribones.

Un grupo de truhanes es bienvenido en Palacio de Gobierno, y, salvo que un sector de la prensa pueda reunir las pruebas suficientes y haga mucho ruido, nada va a pasar. Otra parte del entorno Presidencial es de una mediocridad impresionante. El 'ayayerismo' es una virtud que el Presidente privilegia. Muchos miembros del entorno presidencial se dedican a la intriga política y a preparar "investigaciones CKD" —porque ya vienen "armaditas"— que entregan a los medios. La mayoría de ellos no respeta realmente al Presidente.

Los partidos políticos siguen con las mismas taras que en el pasado permitieron que Fujimori se los volara de un plumazo y sin ninguna dificultad. Es más: los principales líderes políticos no tocan al fujimorismo ni con el pétalo de una rosa, porque esperan sacar votos de ahí. Al paso que van, Fujimori los va a volver a desplumar, pues sigue creciendo en las encuestas y es el primero en la lista de eventuales candidatos.

No se ha concretado ninguna reforma institucional sustantiva. La constitucional está en el tintero, la judicial nunca empezó, la policial se entrampó, la militar ha ido perdiendo fuerza, la del Estado solo es un buen tema de discursos. La inversión pública se decide en función del rédito político para el Presidente —idioteces como crear más universidades nacionales, por ejemplo— y no después de una real evaluación social del pro-

yecto. En muchas reformas ya ni se avanza sino que se retrocede.

En cuanto a los cargos autónomos, es difícil ejercerlos adecuadamente y con dignidad. Que lo digan, si no, en la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción o en la ONPE.

No aburriré más con el diagnóstico de lo obvio, pero sí concluiré que no se observa motivo alguno que lleve a pensar que todo esto va a cambiar en el año y medio que queda.

Así, el Gobierno y la oposición fracasaron rotundamente para llevar a cabo una transición ordenada y valiosa. La culpa la tienen, por tanto, ambos sectores, pero en un país con una presencia tan marcada del Presidente, la responsabilidad principal recae sobre él.

Desde el punto de vista del Gobierno, la culpa la tiene el 'combo' "mafia-oposición-prensa-encuestas". Pero la verdad es otra. Gobernar el Perú es complejo: no hay tiempos sencillos y cada régimen encara sus propias dificultades. La diferencia radica en que algunos saben enfrentarlas con las armas constitucionales a su alcance y otros no. La Presidencia de Toledo no lo supo, y se enredó en sus propios dilemas, limitaciones y ambiciones personales de sus principales integrantes.

¿Pudo tener este Gobierno —y, por tanto, la transición— un destino diferente? Por supuesto. Si el presidente Toledo se hubiera preparado para gobernar, empezando por alcanzar él mismo una comprensión mínima

del Estado peruano y de la historia del país. Toledo es una persona que lee poco, y eso se nota. Su patética "sorpresa", a los pocos días de jurar el cargo, por lo "fácil que es gobernar", demostró una ignorancia elevada.

De paso, hicieron mal algunos sectores que ayudaron a Toledo a derrotar a Fujimori y a ponerlo en Palacio, al contestar todas las críticas que se le hacían al inicio del Gobierno como "argumentos de la mafia". Bastante después, se convirtieron en sus críticos más ácidos, pero ya era muy tarde. El Presidente se creyó el cuento y sigue refugiado en él. Quizá hubiera sido diferente si su entorno de mayor confianza lo hubiera "cuadrado" desde el comienzo.

El Gobierno y la oposición fracasaron rotundamente para llevar a cabo una transición ordenada y valiosa. La culpa la tienen, por tanto, ambos sectores.

Si Toledo hubiera conocido algo de la historia peruana, se habría preocupado por establecer, al inicio de su Gobierno, un plan viable con una agenda realista y un equipo consistente y capaz de ejecutarlo. En su lugar, Toledo vivió en la improvisación,

en el día a día, y —con algunas valiosas excepciones— les abrió las puertas a varios ineptos y truhanes ávidos por llenarse los bolsillos a costa del Estado. El virus de la corrupción se instaló en el Gobierno con la complacencia presidencial. Un rasgo lamentable de la presidencia de Toledo ha sido su promiscuidad para juntarse con personas de pésima reputación.

Finalmente, está la frivolidad con la que Toledo entendió la Presidencia. Pensó que el Estado peruano —empezando por Palacio— era una máquina aceitada que funcionaba sin problemas, con el piloto en automático. Craso error. Se quedó atrapado en la pompa de la ceremonia y la frase vacía. La gente se dio cuenta rápidamente de la frecuente contradicción entre el discurso de Toledo y Eliane Karp con lo que ambos hacían en la práctica, y les perdió el respeto.

El resultado es evidente: un Presidente que quiso ser Pachacútec llegará al 2006 rengueando, pero sin alcanzar los objetivos que reclamaba esta transición. Paradójicamente, su mayor fortaleza es que la oposición tiene el mismo problema de credibilidad que él.

Mirando para delante, el riesgo mayor del nuevo Gobierno que se elija en el año 2006 —cualquiera que sea el Presidente— es que enfrentará la misma debilidad estructural que se observa actualmente, pues desde el punto de vista de la reforma institucional prácticamente no se hizo nada en el quinquenio previo.

El bloqueo de la democracia peruana

alberto
adrianzén

Analista político

En junio del 2001, un mes antes de asumir la Presidencia de la República, Alejandro Toledo le dijo a la BBC de Londres: "No puedo defraudar. Yo estoy sentenciado a no fracasar". Hoy sabemos que no solo podía defraudar, sino también fracasar.

Sin embargo, el fracaso de Toledo no es solo el de su Presidencia, el de su Gobierno o el de su partido; es también el bloqueo de la transición democrática que los peruanos iniciamos luego de la caída de Alberto Fujimori.

Este bloqueo de la transición democrática bien podría resumirse en una de las conclusiones del "Latinobarómetro" publicado en el mes de agosto recién pasado¹:

"El Perú es el único país donde se han aumentado las demandas autoritarias a la luz del mal desempeño del Gobierno que no tiene ninguna base popular de sustentación. El Perú pasa por un momento similar al que tenía Argentina cuando cae De la Rúa, indicadores de opinión que se acercan al 100% llegando a más de 90% de desaprobación".

El Perú, por lo tanto, está en la misma ruta del reciente informe del PNUD —"La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos"— publicado este año, en el que se afirma que

existe el riesgo de un regreso del autoritarismo en América Latina.

El bloqueo de la transición a la democracia, por lo tanto, podría ser definido no solo como la vuelta o la amenaza permanente del régimen autoritario, sino también como el agotamiento del régimen democrático como instrumento de legitimidad del poder político. Es cierto que ambos procesos son caras de una misma moneda: se puede afirmar que la amenaza autoritaria es expresión de la falta de legitimidad del régimen democrático; sin embargo, hacemos la diferencia para explicar mejor en qué consiste el bloqueo de la transición.

La complejidad de las transiciones democráticas

Desde un punto de vista general, se puede afirmar que las transiciones democráticas son procesos que consisten en el cambio de un régimen a otro. Dicho de otra manera, la mudanza de un régimen autoritario a otro democrático. Por ello, el cambio de reglas —y, dentro de ellas, el proceso y la manera como se elige (democracia electoral)— es un aspecto clave de la transición.

Sin embargo, hoy la literatura académica sobre este punto muestra un mayor grado de



complejidad. Vicente Palermo señala que las transiciones se deben entender como procesos que contienen un doble movimiento: de un lado, como un cambio de régimen (de uno autoritario a otro civil); y, por el otro, como un cambio de las reglas que organizan la actividad económica, política y estatal.

Para Palermo, la consolidación democrática, que es el proceso que sigue y que al mismo tiempo es simultáneo a la transición, puede ser pensado "convencionalmente como la culminación de un proceso de cambio de régimen desde un autoritarismo de cuño militar"; pero también puede ser concebido "como un proceso más amplio y profundo, que supondría una ruptura definitiva con patrones de interacción política presentes desde muchas décadas atrás en nuestros países, independientemente de la vigencia o no de las instituciones representativas"².

Como se puede observar, para este autor las transiciones —y ello incluye también a los procesos de consolidación democrática— suponen una dualidad: un cambio institucional, es decir, el reemplazo de las instituciones del régimen autoritario por otras democráticas definidas por su autonomía, independencia y su carácter inclusivo; y un cambio de los patrones de interacción política, entendidos como las relaciones y las mediaciones entre las instituciones, los partidos, los políticos y la sociedad.

Estas precisiones ayudan a entender mejor situaciones como las actuales y en las que, habiendo un cambio de régimen, la desazón hacia el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la política y los partidos por la persistencia de viejos patrones de interacción política, explica el incremento de la desafección política, el malestar frente a la democracia y la amenaza autoritaria.

Ahora bien: si quisiéramos complejizar aun más esta problemática de las transiciones, podemos decir que, en realidad, hay un tercer nivel de cambio: el del orden social. Dicho de otro modo: la necesidad de mudanza de un orden social injusto por otro justo, independientemente de la existencia de un régimen democrático o autoritario.

Cuando se juntan los malestares por la persistencia de las viejas formas de interacción política con las demandas de un orden socialmente justo, es decir, el rechazo social al orden vigente, lo más probable es que las democracias siempre sean precarias y se encuentren al borde del estallido social, como viene

sucediendo hoy; entonces se incrementan las posibilidades de que aparezcan los llamados *outsiders*, o lo que Guillermo O'Donnell ha llamado "democracias delegativas".

Si se acepta lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que el bloqueo de la transición democrática guarda relación directa con esta incapacidad de reformar la realidad y de soldar nuevamente, si cabe la expresión, el Estado con la sociedad. Es decir, con crear las bases materiales y una nueva legitimidad estatal y social para la democracia y para el nuevo Estado que debía emerger luego de concluir el autoritarismo.

El fracaso de Toledo no es solo el de su Presidencia, el de su Gobierno o el de su partido; es también el bloqueo de la transición democrática.

El Gobierno de Toledo

Porque si algún defecto se le puede achacar al Gobierno de Toledo no es solo el no haber planteado, una vez instalado en el poder, una coalición antifujimorista y, luego, un pacto antiautoritario para darle sentido político a su Gobierno y normar las relaciones con la sociedad, sino también el no haber puesto en marcha un Gobierno que tuviese como principal vocación el cambio y la reforma del país.

El Gobierno de Paniagua no lo podía hacer, por sus orígenes parlamentarios; sin embargo, hay que decirlo, puso señales y

abrió trocha para que este pacto y un nuevo gobierno reformista fuesen posibles en el país. Dejó, por lo tanto, tareas pendientes que requerían ser continuadas por el nuevo Gobierno y que expresaban, si bien de manera inicial, un cuestionamiento del pacto de dominación autoritario de ese entonces, la necesidad de una nueva democracia ganada en las calles y consecuencia de una nueva mayoría política en el país.

En verdad, poner fin al fujimorismo era una posibilidad, una invitación y un tránsito necesario para emprender un conjunto de reformas, refundar el país e iniciar un ciclo democrático y republicano de larga duración.

Ahora sabemos que muy poco se avanzó en cambiar el país. Luego de tres años, ni existe un Gobierno reformador ni es posible un pacto antiautoritario debido al compromiso de algunos sectores políticos con el fujimorismo. La falta de objetivos claros, la fractura que se produjo con el gobierno de transición, la ausencia de una élite audaz, así como la corrupción, la persistencia de la desigualdad, del patrimonialismo y del *lobbismo*, han terminado casi por devorar la esperanza democrática en nuestro país y bloquear la consolidación de la democracia. ■

1 "Informe-Resumen. Latinobarómetro 2004. Una década de mediciones". Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, agosto del 2004.

2 Palermo, Vicente: "Temor y temblor: El dilema entre conmovir las reglas y quebrar las coaliciones". *Estudios Sociales* n.º 13. Río de Janeiro: Instituto de Pesquisas de Río de Janeiro.